

Santiago, siete de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En esta causa RUC N° 1900160697-5, y RIT N° 137-2021 del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de doce de mayo de dos mil veintidós, se condenó a **LORENA NICOL TRONCOSO MARÍN** como autora del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 1°, ambos de la Ley N° 20.000, ejecutado en grado de consumado y cometido el día 2 de octubre de 2019, a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y multa a beneficio fiscal de cuarenta Unidades Tributarias Mensuales.

Por la misma sentencia se condenó a **LUIS ALBERTO TRONCOSO SANDOVAL** como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3° en relación al artículo 1°, ambos de la Ley N° 20.000, ejecutado en grado de consumado y cometido el día 2 de octubre de 2019, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y multa a beneficio fiscal de cuarenta Unidades Tributarias Mensuales; y como autor del delito de cultivo de plantas del género cannabis sativa contemplado en el artículo 8 de la Ley 20.000, cometido en la comuna de Estación Central de la ciudad de Santiago, el día 2 de octubre de 2019, a sufrir la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para



derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y multa a beneficio fiscal de cinco Unidades Tributarias Mensuales, pagaderas en diez cuotas iguales y sucesivas de media Unidad Tributaria Mensual cada una, a contar del mes siguiente de la ejecutoria de la sentencia condenatoria.

Se dispuso que las penas impuestas deberán ser cumplidas en forma efectiva.

En contra de esa decisión, las defensas de ambos sentenciados interpusieron sendos recurso de nulidad, que fueron conocidos en la audiencia pública de quince de febrero pasado, como da cuenta el acta que se levantó con la misma fecha.

CONSIDERANDO:

1º) Que la defensa de la acusada Lorena Nicol Troncoso Marín alega como única causal de nulidad la contemplada en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, pues se aplicaron erróneamente los artículos 1, 3, 4, 42 y 43 de la Ley N° 20.000, artículos 1 y 2 del Código Penal.

Explica que el tribunal al estimar como constitutivo de delito el hecho que dio por acreditado, infringió el principio de lesividad u ofensividad, que se alza como principio limitador del *ius puniendi* estatal, en el sentido de que no le podría haber constado la antijuridicidad material de la conducta concreta efectuada por el imputado, pues la conducta desplegada podría únicamente enmarcarse dentro de la figura contemplada en el artículo 4° de la Ley N° 20.000 y no dentro de las enmarcadas en el artículo 3° de la misma ley, atendida la ausencia de la determinación de la pureza de la sustancia



incautada en los protocolos de análisis químicos incorporados al juicio, lo que impide arribar a la conclusión que la sustancia que se encontró en su domicilio constituyera el objeto material prohibido por el legislador, esto es, que aquella sustancia haya sido capaz de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.

Arguye que la exigencia de indicar la pureza de droga se encuentra establecida en el artículo 43 de la Ley N° 20.000, que, al momento de referirse al correspondiente informe pericial, señala que éste debe contener un protocolo de análisis químico, en el que ordena describir, entre otras cosas, el grado de pureza de la sustancia incautada. Aquello se relaciona inmediatamente con el artículo 1° de la misma ley, que, respetando la función de protección de bienes jurídicos que compete al Derecho Penal, exige para imponer las penas que las sustancias sean aptas para producir graves efectos tóxicos o daños considerables para la salud. Esta última cuestión se explica porque el bien jurídico eminentemente protegido en esta ley es, precisamente, la salud pública.

De ahí la exigencia de ese antecedente –la determinación de la pureza de la droga- precisamente porque la capacidad de una sustancia cualquiera para producir los efectos señalados viene determinada exclusivamente por la concentración en que algunos compuestos, identificados como principios activos, se encuentran presentes en ella, pues sin éstos resulta imposible juzgar si la sustancia incautada es o no capaz de producir los efectos mencionados y, consecuentemente, la conducta de portarla, guardarla, o traficarla es materialmente antijurídica.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, se invalide el juicio y la sentencia recurrida respecto del delito por el cual fue condenada Lorena Nicol



Troncoso Marín, y proceda a determinar el estado en que hubiere de quedar el procedimiento..

2º) Que el motivo principal de invalidación alegado por la defensa de Luis Alberto Troncoso Sandoval es el mismo referidos en el considerando precedente y fundado en las mismas vulneraciones legales.

Como causal subsidiaria funda su recurso en el artículo 373 a) del Código Procesal Penal en relación al Artículo 19 N° 3 y 7 b), de la Constitución Política de la República, esto es, infracción al debido proceso entendido como el derecho a un proceso previo legalmente tramitado, artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Indica que su representado no debía ser condenado por el ilícito de cultivo de plantas cannabis sativa, como una figura penal distinta o independiente; toda vez que el Ministerio Público acreditó que él y su hija tenían un tráfico, no sólo de cocaína y pasta base, sino que además comercializaban marihuana o cannabis sativa, es decir tenían un tráfico completo donde comercializaban las tres drogas.

Agrega que vulneraron las garantías constitucionales ya mencionadas sosteniendo que el tribunal a quo considera, erróneamente según esta parte, que el delito de cultivo de plantas cannabis sativa es un delito independiente y que no tiene conexión alguna con el delito de comercialización de cocaína y pasta base. La venta o, por denominarla, oferta de productos que el condenado realizaba, comprendía un todo en su conjunto: él comercializaba la marihuana, la cocaína y la pasta base.

En ninguna parte de la prueba ofrecida por la Fiscalía se acredita que la marihuana seca y lista para vender haya procedido de una tercera fuente; es



decir, no se acreditó que haya sido producida en Paraguay o en Los Andes; y por otro lado, la Fiscalía no acreditó por su parte que las plantas cultivadas no tuvieran una relación con la marihuana seca que se vendía. Es decir, el Ministerio Público no acreditó la independencia del cultivo y comercialización de la marihuana producto del cultivo de las plantas cannabis sativa.

Por otro lado, toda la prueba analizada demuestra que las ganancias obtenidas eran una sola; sin que el cultivo de las plantas de cannabis sativa, le generaran una segunda fuente de ingresos. Las plantas de cannabis sativa se cultivaban para secarla y luego comercializarlas, dentro de un sólo negocio de comercialización de cocaína, pasta base y marihuana; los ingresos obtenidos eran uno solo.

Por ello, no se puede considerar que el condenado sea castigado por el cultivo de plantas de cannabis sativa, como un delito independiente, sino que esta conducta estaba subsumida dentro de todo el tráfico que él realizaba.

3º) Que, los hechos establecidos en el considerando quinto de la sentencia recurrida son los siguientes:

“En el mes de febrero de 2019, se recibieron antecedentes que daban cuenta de que en un sector denominado “La Jaula”, en la comuna de Cerrillos, se comercializaba droga, y que esta pertenecía a una familia conocida como “Los Troncoso”. Se indicaba, asimismo, que la venta de drogas se dividía entre los departamentos, donde cada uno de ellos vende turnándose las semanas para ello, ventas en las que participarían, entre otros, Nicole Troncoso, que es hija de “Luto” Troncoso, quien también vendía drogas.

Con estos antecedentes se despachó una orden de investigar a la Policía de Investigaciones de Chile, logrando individualizar a un grupo de personas, especialmente familiares y terceros, los cuales se dedican al Tráfico



de drogas en la población Oreste Plath comuna de Cerrillos y en la población Santiago comuna de Estación Central.

Mediante técnicas de la Ley N° 20.000, se estableció que dentro del clan familiar de “LOS TRONCOSO”, participan activamente en la comercialización de droga LUIS ALBERTO TRONCOSO SANDOVAL, apodado “el luto”, y su hija LORENA NICOLE TRONCOSO MARIN, quienes, en conjunto con terceras personas, también se dedican al tráfico ilícito de drogas en la población Oreste Plath comuna de Cerrillos. Específicamente, LORENA NICOL TRONCOSO MARÍN, a la cual nombran por NICOL, utiliza el número 961070349, para mantener constantemente conversaciones con diversas personas para coordinar entregas, compras y venta de droga, impartiendo instrucciones con tal fin y, además, habita en dos inmuebles donde prepara y ejecuta la venta de droga, principalmente en calle Folklore Chileno N° 2224, departamento 301, Población Oreste Plath, comuna de Cerrillos, donde en la parte posterior de dicho block en el lugar denominado “la jaula”, mantiene comercialización de droga a través de diversas personas que la venden y le dan cuenta de lo que van recaudando. Asimismo, se estableció, conforme a las interceptaciones telefónicas, que LORENA NICOL TRONCOSO MARÍN, le ayuda en la dosificación y venta de droga a su padre LUIS ALBERTO TRONCOSO SANDOVAL, apodado “el luto”, el cual habita en calle Galvarino N° 1718 de la Población Nogales de la comuna de Estación Central, inmueble utilizado como centro de acopio y distribución de la droga.

Por su parte, LUIS TRONCOSO SANDOVAL, al igual que su hermano comparte la dirección en la venta de la droga en el sector denominada “la jaula”, Población Oreste Plath, comuna de Cerrillos, comercialización que administra su hija LORENA NICOL TRONCOSO MARIN.



Con los antecedentes anteriores con fecha 30 de septiembre de 2019, el Tribunal de Garantía, autorizó la entrada y registro de los domicilios objeto de la investigación, y con fecha 02 de octubre de 2019, aproximadamente a las 09:00 horas, se procedió a la entrada y registro de los mismos, con el siguiente resultado: En el domicilio de calle Galvarino N° 1718, comuna de Estación Central, se detuvo a LUIS ALBERTO TRONCOSO SANDOVAL y a LORENA NICOL TRONCOSO MARIN, a quienes se les sorprendió manteniendo en el lugar 5 bolsas de nylon transparente contenedoras de cocaína base, con un peso bruto de 184,98 gramos, levantados bajo cadena de 5982526; 01 bolsa de nylon transparente, contenedora de cannabis sativa o marihuana, con un peso bruto de 37,25 gramos, cadena de custodia número 5982523; 01 bolsa de nylon transparente, contenedora de cannabis sativa o marihuana con un peso bruto de 99,05 gramos, cadena de custodia número 5982485; 01 bolsa de nylon transparente contenedora de cannabis sativa o marihuana, con un peso bruto de 71,73 gramos, cadena de custodia número 5982506; 01 bolsa de nylon transparente contenedora de cannabis sativa o marihuana con un peso bruto de 16,31 gramos, cadena de custodia número 5982520; 03 bolsas de nylon, contenedoras de cannabis sativa, con un peso bruto de 27,47 gramos, cadena de custodia número 5982524; 01 bolsa de nylon contenedora de cannabis sativa con un peso bruto de 903,8 gramos, cadena de custodia 5982486; 01 bolsa de nylon transparente contenedora de cocaína base con un peso bruto de 23,91 gramos; 31 plantas de cannabis sativa o marihuana, sin que tuviesen autorización alguna para el cultivo de dicha sustancias, levantadas bajo cadena de custodia 5982518.

En el domicilio ubicado en pasaje Folklore Chileno N° 2224, departamento 301, comuna de Cerrillos, se encontró 01 envoltorio de nylon



transparente contenedora de cocaína clorhidrato con un peso bruto de 32,25 gramos, cadena de custodia 5982494; además, se incautó en el lugar diversas especies utilizadas comúnmente para la dosificación de la droga, entre ellas 02 balanzas digitales y diversas bolsas de plástico, levantado todo esto bajo cadena de custodia número 5982495”;

4º) Que los hechos reproducidos precedentemente fueron calificados, respecto de ambos acusados como constitutivos del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3º en relación con el artículo 1º, ambos de la Ley N° 20.000 y respecto de Luis Troncoso Sandoval como autor del delito de cultivo del artículo 8 del mismo cuerpo legal para lo cual se tuvo presente la declaración de la perito químico Paula Fuentes Azócar, quien señaló que el protocolo de análisis químico, remitido por Oficio Reservado N° 18667-2019, dio como resultado que se trata de clorhidrato de cocaína al 18% y cocaína base al 61%.

Por otra parte en los reservados 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101 todos 2019, suscrito por el perito Edgard Pérez, refiere que estamos frente a cannabis sativa

También se incorporó en el juicio oral los protocolos de análisis químico de las sustancias incautadas y el informe respectivo sobre efectos y peligrosidad de la cocaína y cannabis sativa, que concluyen lo expresado por los peritos;

5º) Que, para resolver adecuadamente la causal común impetrada por ambos recursos, se hace necesario tener en cuenta que el tipo penal por el cual fueron condenados los imputados, contenido en el artículo 3º y 8º solo respecto de Luis Troncoso de la Ley N° 20.000, dispone: *“Las penas establecidas en el artículo 1º se aplicarán también a quienes trafiquen, bajo*



cualquier título, con las sustancias a que dicha disposición se refiere, o con las materias primas que sirvan para obtenerlas y a quienes, por cualquier medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo de tales sustancias. Se entenderá que trafican los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas.”

El artículo 1° de la ley en referencia, alude a las sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces o no de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.

Por el contrario, el artículo 4° de la misma ley prescribe: *“El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o segundo del artículo 1°, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. En igual pena incurrirá el que adquiera, transfiera, suministre o facilite a cualquier título pequeñas cantidades de estas sustancias, drogas o materias primas, con el objetivo de que sean consumidas o usadas por otro. Se entenderá que no concurre la circunstancia de uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, cuando la calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada no permita racionalmente suponer que está destinada al*



uso o consumo descrito o cuando las circunstancias de la posesión, transporte, guarda o porte sean indiciarias del propósito de traficar a cualquier título”;

6°) Que, en ese orden de cosas, para lo que interesa a la causal común de los recursos, la sentencia impugnada en su considerando cuarto, acudiendo a la declaración de la perito y los informes evacuados por ellos, estableció que las sustancias incautadas eran cocaína base y clorhidrato de cocaína en una concentración que media entre 18% al 61% y cannabis sativa.

Por lo anterior, al haberse establecido la pureza de la cocaína, la cuestión relativa a las distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores sobre la cuestión de derecho planteada en el recurso, carece de fundamento;

7°) Que, también debe tenerse presente que, de las descripciones fácticas de los tipos penales en referencia, aparece que en el delito de tráfico de estupefacientes previsto en el artículo 3° de la ley del ramo, la pureza de la sustancia traficada no es una exigencia del tipo penal.

Al efecto, la propia Ley N° 20.000, en su artículo 63, ha establecido que será un reglamento el que señale las sustancias a que se refiere el artículo 1° del referido cuerpo legal. En el D.S. N° 867 del año 2008, que reemplazó al D.S. N° 565 del año 1995, la cocaína se encuentra contemplada en el actual artículo 1° del citado Reglamento.

De esta manera, la presencia de los principios activos de la sustancia de rigor es suficiente para calificarla como de aquellas que constituyen el objeto material del delito de tráfico ilícito de drogas, cuestión que ocurrió en este caso al detectarse en las muestras periciadas, según se explicitó en el fundamento sexto, la presencia de aquellos principios activos propios de dicha sustancia;



8°) Que, a mayor abundamiento, si bien esta Corte ha sostenido en sentencias pasadas, que por ser la salud pública el bien jurídico tutelado por el delito descrito en el artículo 4° de la ley del ramo, tráfico o porte de pequeñas cantidades, se requiere que el ente acusador pruebe en el juicio la peligrosidad para la salud colectiva de la sustancia específica requisada, mediante el informe técnico que especifique la composición y grado de pureza del producto examinado, puesto que dicho antecedente es el que demuestra la lesividad o peligro concreto que reviste la sustancia estupefaciente, tales disquisiciones, en todo caso, se justificarían para dar por establecido el ilícito de tráfico de pequeñas cantidades de estupefacientes, desde que dicho componente es trascendente a la hora de confirmar o descartar el uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo del tenedor de la droga. Es esta causal de exención de responsabilidad penal la que tornaría en imprescindible contar con el estudio de la calidad o pureza de la sustancia, condición que no aparece en la tipificación del artículo 3° de la Ley N° 20.000.

De esta manera, también procede rechazar las alegaciones vertidas por la defensa en su recurso, toda vez que el total de la sustancia incautada al imputado –no discutida- a saber, hallándose en el primero de los domicilios referidos clorhidrato de cocaína (en una cantidad de 32,25 gramos brutos); y en el segundo inmueble, donde se produce la detención de ambos, cannabis sativa (1 kilo y 155 gramos brutos); cocaína base (208,89 gramos brutos); y, además, de las 31 plantas de marihuana, dada su aptitud de ser dosificada y distribuida a numerosos consumidores finales, revela la inequívoca presencia del peligro concreto para la salud pública, objeto jurídico de protección amparado por la Ley N° 20.000 (SCS N° 23245-2019 de 30 de septiembre de 2019);



9°) Que respecto a las alegaciones que giran en torno a la supuesta errónea aplicación del derecho al haber el tribunal calificado los hechos que se dieron por probados como un delito de tráfico de sustancias estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3° con relación al 1° de la Ley N° 20.000, en circunstancias que en derecho correspondía, a juicio de la defensa, una condena enmarcada dentro de las establecidas para el tráfico de pequeñas cantidades de estupefacientes, figura descrita y sancionada en el artículo 4° de la referida ley, debe atenderse a la naturaleza de la causal esgrimida, que supone una infracción normativa, por lo que debe tenerse como base fáctica inamovible los hechos establecidos por los sentenciadores del grado en el motivo octavo del fallo recurrido;

10°) Que, al tenor de tales sucesos, los sentenciadores dieron por configurado el delito de tráfico de estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 3°, en relación con el artículo 1°, ambos de la Ley N° 20.000, en grado de consumado, dado que los acusados fueron sorprendidos en un mismo contexto situacional, en posesión de diferentes tipo de droga en una cantidad importante de peso, a su vez dosificada parte de ella.

El análisis de la doctrina y la jurisprudencia permite identificar ciertas directrices que comprenden, de manera más o menos general las hipótesis que verificarían el amplio concepto de errónea interpretación o aplicación del derecho, a saber:

- Cuando existe una contravención formal del texto de la ley, es decir cuando el juzgador vulnera de manera palmaria y evidente, el texto legal.
- Cuando se vulnera el verdadero sentido y alcance de una norma jurídica que sirvió de base y fundamento para la dictación de una sentencia.



- Cuando existe una falsa aplicación de la ley, situación que se verificaría cuando el juzgador deja de aplicar una norma jurídica, cuando resulta evidentemente pertinente su aplicación. (Andrés Rieutord Alvarado, El Recurso de Nulidad en el Nuevo Proceso Penal, Editorial Jurídica de Chile, 2007, pág. 47);

11°) Que respecto del ejercicio valorativo llevado a cabo por los jueces y cuya conclusión condenatoria se ataca, resulta conveniente recordar que, como reiteradamente ha sostenido esta Corte, la Ley N° 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas no ha concluido conceptos ni elementos categóricos para establecer la diferenciación del delito de tráfico de grandes cantidades de droga y del delito contemplado en el artículo 4° del mencionado cuerpo legal, dejando entregada dicha determinación a los jueces del fondo.

Ya desde el año 2005 este Tribunal ha resuelto, a partir del fallo de 19 de julio de 2005, pronunciado en causa Rol N° 2005-05, que la expresión pequeña cantidad utilizada por el legislador es un principio regulativo u orientador, caracterizado por no ofrecer baremos ni jurídicos ni extrajurídicos para su complementación, plenamente exento de valoración formal y sin contenido. En otras palabras, la intención del legislador con la incorporación de expresiones como las que nos convoca, fue dejar entregado al criterio de los jueces el llenar de substancia, en el caso concreto este concepto indeterminado que contrasta enteramente con las cláusulas normativas, pues aquél no entraña contenido valorativo ni medida de valor alguno;

12°) Que, en consecuencia y en mérito de la naturaleza indeterminada de este concepto regulativo, en la figura de tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades no puede determinarse con una precisión matemática,



con qué cantidad de droga se configura, ya que corresponderá a los sentenciadores apreciar en cada caso la calificación a la luz de todos los antecedentes que se tuvieron a la vista en el juicio, incluidas las circunstancias de comisión, dosis encontradas y toda otra circunstancia anexa y circundante a su perpetración, impugnación que no aparece contenida en el recurso, que se dedica sólo a mencionar que por la cantidad de droga encontrada y su concentración, resulta más atendible calificar el delito como la conducta sancionada en el artículo 4 de la Ley N° 20.000.

De esta forma, al hacer uso de la valorización de los medios de prueba aportados, no han podido los jueces cometer el error de derecho que se denuncia;

13°) Que, por todas las razones expuestas, los arbitrios de nulidad deducidos por las defensas de Lorena Nicol Troncoso Marín y Luis Alberto Troncoso Sandoval, será desestimado.

14°) Que en relación a la causal subsidiaria alegada por la defensa de Luis Alberto Troncoso Sandoval, fundado que existió una vulneración al debido proceso por haberse condenado a su defendido por condenarlo por tráfico de estupefacientes y cultivo del artículo 8°, siendo que se trata de un solo tráfico y que la Fiscalía no acreditó la independencia de ambas figuras.

15°) Que, de un atenta lectura del recurso, lo que en realidad cuestiona el recurrente es la valoración que realiza el tribunal de la prueba rendida para arribar a la condena en efecto en el recurso de señala lo siguiente *“En ninguna parte de la prueba ofrecida por la fiscalía, se acredita que la marihuana seca y lista para vender haya procedido de una tercera fuente; es decir, no se acreditó que haya sido producida en Paraguay o en los Andes; y por otro lado, la fiscalía no acreditó por su parte que las plantas cultivadas no tuvieran una*



relación con la marihuana seca que se vendía. Es decir, el ministerio público no ha acreditado la independencia del cultivo y comercialización de la marihuana producto del cultivo de las plantas cannabissativa”.

16°) Que, en cuanto a la causal subsidiaria denunciada en el recurso interpuesto por la defensa de Luis Troncoso, es necesario señalar que en un recurso como el de la especie, no ha sido dada a esta Corte la facultad de realizar una nueva ponderación de los elementos de prueba vertidos en el juicio oral, puesto que ello atenta contra el principio de inmediación y supera los límites de la nulidad, como ya se dijo.

A pesar de ello, la argumentación del impugnante se dirige en este sentido, por cuanto –como se indicó precedentemente- cuestiona la prueba producida por el ente persecutor, sin atacar –como supone la causal de nulidad en examen- el razonamiento del fallo que plasma el análisis global de la prueba rendida, en cuanto éste debe ajustarse a las reglas de la sana crítica, respetando las máximas de la experiencia, los principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados, cosa que de la lectura del fallo objeto de nulidad, se encuentra cumplido por los jueces de la instancia; pero esas protestas sobre la apreciación, más propias de un recurso de apelación, carecen de la eficacia legal requerida para configurar una causal de nulidad como la intentada.

Por tal motivo la causal no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 373 letra b) y 384 del Código Procesal Penal, **se rechazan** los recursos de nulidad deducidos por las defensas de la acusada Lorena Troncoso y acusado Luis Troncoso, contra la sentencia de dos de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de



Santiago y contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC N° 1900160697-5, y RIT N° 137-2021, los que en consecuencia **no son nulos**.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del fallo a cargo del Ministro (S) Sr. Muñoz Pardo.

Rol N° 21.495-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por el Ministro Sr. Jorge Dahm O., los Ministros Suplentes Sr. Juan Manuel Muñoz P., Sra. María Loreto Gutiérrez A., y los Abogados Integrantes Sres. Eduardo Morales R., y Gonzalo Ruz L. No firma la Ministra Suplente Sra. Gutiérrez y el Abogado Integrante Sr. Ruz, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia y por estar ausente, respectivamente.



En Santiago, a siete de marzo de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

